

El personal empleado público ha acumulado, año tras año, pérdidas en su poder adquisitivo, salvo contadas excepciones como las de este año, que no enjugan de ninguna manera el lastre que se arrastra.

Cuando todos los analistas prevén que el IPC subirá el próximo año en torno al 1.5%, el Gobierno, CC.OO., CSIF Y UGT acuerda una irrisoria subida del 0.3% para el 2010.

Al mismo tiempo se nos habla de una revisión salarial que no se sabe muy bien en qué consistirá y que, en cualquier caso, no se activará hasta el 2012.

Otra vez se pretende que el personal empleado público sea quien pague los desequilibrios presupuestarios.

Las organizaciones abajo firmantes, no podemos aceptar que las Administraciones Públicas intenten ahorrar en el capítulo de personal, a costa de los ya bajos salarios y de la calidad de los propios servicios públicos.

Ahorrar así, significa gastar menos en sustituciones de personal, en contrataciones, en ofertas públicas de empleo, en apertura y mejora de servicios, en atención al público...

En definitiva, con las pretensiones del Gobierno pierde el personal empleado público y pierde la ciudadanía con el empeoramiento de los servicios públicos, en un Estado cuyo gasto social ya está por debajo de la media europea.

No entendemos la posición de aquellos sindicatos que están dando por bueno un acuerdo con estos contenidos. Con pérdidas reales y ganancias en el aire.

Nuestras organizaciones siguen exigiendo:

- Subidas salariales con referencias a las variaciones reales del IPC.
- Cláusula de revisión salarial permanente y de activación automática al final de cada año.
- Recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, con especial atención a los escalones retributivos más bajos de las Administraciones.
- Ofertas públicas de empleo que aseguren servicios públicos de calidad y suficientes.
- Reposición de, al menos, el 100% de las bajas de efectivos.
- Posibilidad de jubilación anticipada y parcial para la totalidad del personal empleado público.
- Mejora de los servicios públicos, con la aportación de recursos necesarios, para la atención de las crecientes necesidades ciudadanas, agudizadas por la crisis económica.
- Incorporación de las partidas dedicadas a los planes de pensiones a las retribuciones regulares.
- Descentralización y democratización de la negociación colectiva

Nos oponemos, pues, a cualquier intento de acuerdo que suponga empeorar las condiciones de vida del personal empleado público y reducir la calidad de los servicios públicos para la ciudadanía.

Septiembre de 2009